

La intelectualidad argentina de camino al neoliberalismo: la década de 1980

Sebastián Caviedes*

RESUMEN

A partir del análisis de las principales controversias ideológicas que en los años ochenta marcan la antesala del giro neoliberal argentino, se indaga en la formación y acción política de tres fuerzas político-intelectuales fundamentales del período (empresarial, peronista renovadora y socialista). Se concluye que el desenlace del enfrentamiento entre estas tendencias de la intelectualidad argentina, que define las coordenadas culturales sobre las cuales luego desembarca el neoliberalismo, se sustenta en la crisis de las alternativas políticas y en la profundización de las debilidades históricas de una política nacional popular que trasluce sus mayores signos de agotamiento.

PALABRAS CLAVE: Intelectuales, Estado, neoliberalismo, Argentina, conflicto social.

The Argentine intelligentsia on the road to neoliberalism: the 1980s

ABSTRACT

Based on the analysis of the main ideological controversies that in the 1980s marked the prelude to the Argentine neoliberal turn, this paper investigates the formation and political action of three fundamental political-intellectual forces of the period (business, renovating peronist and socialist). It is concluded that the outcome of the confrontation between these tendencies of the Argentine intelligentsia, which defines the cultural coordinates on which neoliberalism later disembarks, is based on the crisis of political alternatives and the deepening of the historical weaknesses of a national popular policy that shows its greatest signs of exhaustion.

KEYWORDS: Intellectuals, state, neoliberalism, Argentina, social conflict.

En diciembre de 1984, en el marco de una reunión que convocó en la Universidad de Maryland a un significativo grupo de escritores argentinos para debatir sobre los efectos del “Proceso de Reorganización Nacional” en la cultura del país, el historiador Tulio

* Sociólogo y magister en Estudios Latinoamericanos. Programa Académico de Bachillerato, Universidad de Chile.

✉ caviedioh@uchile.cl

Recibido julio 2020 / Aceptado diciembre 2020.

Disponible en: www.economiaypolitica.cl

Halperin Donghi, en su estilo, ilustraba el problema de fondo que, cada tanto, enfrenta la intelectualidad argentina:

En los años durísimos que se quisiera creer que han pasado, eran muy numerosos, como sabemos, los argentinos que contribuían con su talento y experiencia a enriquecer la vida cultural y científica mexicanas, y ofrecían esa contribución invocando con tan imperiosa insistencia el alto ejemplo ofrecido por su tierra de origen, que no dejaban de provocar en sus huéspedes una cierta exasperación, expresada a menudo de modo mexicanamente discreto y cortés en la pregunta de por qué un país en que talentos y destrezas estaban tan generosamente distribuidos se encontraba en situación que hacía, al parecer, urgente escapar de él (...) la réplica era frecuentemente una confesión de éstos, pese a su excepcional sagacidad, eran incapaces de resolver ese enigma. (Halperin Donghi 1988: 27)

Y es que, pese a la importancia de los hombres de ideas para la conformación de la sociedad y del diseño institucional del Estado argentino, durante la mayor parte del siglo XX la distancia, cuando no el conflicto, entre el campo de la cultura y el campo político ha sido más frecuente que su convergencia (Sigal 1991). Ni los partidos políticos o sindicatos ni el Estado, y mucho menos los militares, han estimado deseable la intervención de los intelectuales en la política. Una situación que arraiga en la propia historia del país, desde el exilio de la Generación del 37 a manos de un Rosas que lidera el consenso de las élites regionales de las provincias del Río de la Plata (Safford 1991) hasta la tensa relación con la intelectualidad local –partidaria o no (Fiorucci 2011)– que mantuvo Perón y que traza una ruptura histórica que, aunque latente desde la inmigración masiva y la “sociedad aluvial” (Romero 1975) que toma forma a fines del siglo XIX, estalla con el peronismo y persiste hasta ahora: la tensión entre élites y masas como marco que envuelve la relación entre los intelectuales y la política en la Argentina.

En tal sentido, la especificidad argentina en este ámbito radica en que el nacionalismo popular que da sustento ideológico al peronismo como doctrina, régimen de gobierno y relación entre Estado y sociedad, y que le permite integrar a amplias franjas de la población a los beneficios del crecimiento económico mientras las excluye políticamente al producir sus organizaciones desde el Estado (Weffort 1973), instala la sospecha sobre la función social de los intelectuales en la

sociedad civil. Una situación que adolecerían, entre otros grupos, los de la izquierda socialista argentina, cuyos intelectuales, a poco de terminar el ciclo de Perón, reactualizaban el clásico problema planteado en la teoría marxista respecto a cómo atraer a los estratos intelectuales al partido obrero, pues, no siendo ellos peronistas, debían entenderse con una clase obrera que sí lo era en su mayoría (Aricó 2005).

Una segunda constatación, derivada de lo específico de esa primera tensión, es que el intelectual en ejercicio de funciones estatales ha sido un hecho intermitente y relativamente poco trascendente después de la asunción del radicalismo yrigoyenista (Altamirano 2010). Siguiendo una tendencia que es regional, los intelectuales en la Argentina, desde comienzos del siglo XX, declinan paulatinamente de actuar como letrados y políticos para desenvolverse como consejeros de estos últimos. Esta situación, que Sigal (1991) evalúa como un signo de su alejamiento de la política, pero no del ámbito de lo político, remite a la consideración que se debe tener del peso del Estado en la configuración de las sociedades latinoamericanas. En efecto, y volviendo al viejo dilema del paso de lo social a lo político, aunque es cierto que no solo aquellos que se proponen conscientemente intervenir en la política dejan su marca en la cultura de una sociedad (Sigal 1991), no lo es menos que, para forzar cambios globales, los intelectuales argentinos, como en otras partes del subcontinente, han necesitado de la acción política orientada al Estado, pues es allí donde se desata la pugna central por los cambios sociales y políticos en la etapa republicana (Faletto 1989). Es solo en ese contexto, además, que el comentario de Halperin Donghi adquiere trascendencia para la historia argentina: pese a lo prolífico de su producción y a la alta difusión que esta encuentra en el espacio público, la intelectualidad argentina ha sido permanentemente excluida de las decisiones políticas fundamentales¹.

¹ Pese a la existencia de procesos culturales regionales, cabe establecer caso a caso los rasgos típicos de la relación entre intelectuales y política en las experiencias nacionales. Así, por ejemplo, Chile constituye un contrapunto con la Argentina: los intelectuales han tendido a ser “hechos estatales”, tanto por su inclinación a formar parte de la clase política y representar la ideología oficial, como por reconocerse en una función pública destinada a educar a una vasta capa de profesionales y técnicos (Brunner y Flisfisch 2014). La vida cultural, irremediablemente ligada a los derroteros de la acción estatal a causa de la estrechez económica, ha articulado la incorporación a la función pública con una dirección de progreso social nacional (Brunner 1981). Así, la colaboración profesional con las políticas oficiales ha predominado sobre la dimensión más crítica del trabajo intelectual (Faletto 2016).

Pues bien, sobre la base de tales consideraciones teóricas e históricas, este artículo aborda cómo las mutaciones que experimentan las concepciones del Estado y de la economía en la Argentina, conforme a los cambios que se producen en la estructura social y económica del país durante los años ochenta, contribuyen al desembarco neoliberal en la década posterior. La hipótesis es que una de las condiciones de posibilidad para la realización de este giro se encuentra en el modo en que la intelectualidad local interviene o se ve afectada por la crisis social y política que se profundiza en los años ochenta, cuyos rasgos centrales son el ocaso del modelo de desarrollo nacional popular y la transición a un régimen de gobierno democrático.

En dicho escenario, cabe trazar el mapa de las fuerzas intelectuales enfrentadas, dando cuenta de las controversias que, hacia fines de esa década, establecen las coordenadas políticas e ideológicas sobre las cuales se asienta tal cambio estructural. Cabe señalar que la referencia a un enfrentamiento o lucha busca evitar asumir la inevitabilidad de este proceso, pensándolo, más bien, como la larga resolución de un conflicto político-intelectual cuyas raíces históricas son anteriores. Asimismo, la noción de fuerzas intelectuales se utiliza para concebir a la intelectualidad como un grupo social más –y no como una sumatoria de personalidades individuales notables– que, actuando colectivamente, incide en la orientación política y económica de sus respectivas sociedades. Ello significa, para este caso de estudio específico, que, desde un punto de vista temporal, participan de las transformaciones que impulsa el giro neoliberal en la Argentina –en cuestiones como la acción del Estado, el procesamiento de los conflictos sociales, la política económica, entre otras–, no solo antes de que se produzcan (impulsándolas o frenándolas) o después de la puesta en marcha de las reformas de ajuste estructural (legitimándolas o criticándolas), sino durante el proceso mismo de su formulación e implementación.

El foco del estudio está puesto en la intelectualidad ligada a las ciencias sociales (economistas, politólogos y sociólogos). No obstante, de modo más preciso, interesan fracciones específicas dentro de esos núcleos intelectuales: las que cuentan con algún tipo de organicidad interna y de vinculación con fuerzas políticas representantes de intereses sociales, debido a que en tal nexo reside la viabilidad práctica de

sus ideas en la política. Este enfoque enfatiza el subcampo del campo intelectual que encuentra su legitimidad en la autoridad científica de sus miembros (Bourdieu 1976). Si bien esto último ha sido relevado antes por los estudios sobre las tecnocracias en América Latina, no suele considerarse en ellos el curso del enfrentamiento entre las distintas fuerzas intelectuales implicadas en el período neoliberal, ni tampoco a actores distintos a los tecnócratas de las reformas de ajuste estructural. Ello aun cuando, de hecho, el ascenso de la intelectualidad tecnocrática haya dependido siempre de la ausencia de las presiones corporativas de los actores nacional populares (Ruiz 2019), de manera que la conformación de su poder en la toma de decisiones, en especial en los años noventa (Heredia 2015), necesariamente pasó por derrotar a posiciones intelectuales alternativas, no solo en un sentido puramente técnico, sino como parte de un proyecto político de sociedad.

Las conclusiones que se busca extraer en este artículo apuntan, más que al devenir de un grupo intelectual en particular o al de una tendencia ideológica específica, a las particularidades que en Argentina tiene el proceso latinoamericano de escisión de lo social y lo político, y entre lo político y lo intelectual². En otras palabras, cómo se manifiesta en el seno de la intelectualidad argentina la pérdida de las referencias sociales sobre las que descansaron las interpretaciones sociales y políticas sobre la sociedad regional y nacional durante el siglo XX, cuya base se encontraba en la diferenciación de clases y grupos sociales específicos, resultado de las estrategias de desarrollo y de las dinámicas de la política nacional popular que predomina en el subcontinente desde los años treinta (Ruiz 2019).

Dicha pérdida, originada en el agotamiento de esos rasgos históricos previos, que secunda el estado de crisis que domina los años setenta y ochenta en el subcontinente y luego consolida el giro neoliberal que se produce en la mayoría de los países latinoamericanos en la década del noventa, impulsa el enseñoramiento del actor tecnocrático en aquellos lugares donde se ponen en marcha reformas de ajuste estructural. De este modo, pasan a dominar en el Estado y el debate público unos grupos políticos-intelectuales cuyo *ethos* es la administración del poder existente antes que la transformación o formulación

² Para un análisis de este problema en la experiencia chilena, también situado en los años ochenta, véase Caviedes (2018).

de proyectos de sociedad globales (Faletto 2016). Como resultado, el vínculo entre intelectualidad y sociedad que marcara la dinámica política e intelectual del siglo XX, además de confirmar su deterioro, consecuencia de los cambios en el paisaje social y político regional, se proyecta como un legado de fines de siglo que, dependiendo de las características estructurales y conflictivas de cada país, mantiene el desajuste entre intelectuales, sociedad y política.

De este modo, el esfuerzo por reconstruir el enfrentamiento entre las fuerzas intelectuales más importantes del período que antecede al giro neoliberal, incluyendo a tecnocracias e intelectuales bajo el concepto más amplio de “intelectualidad”, es fundamental para la interpretación sociológica que se propone. Ello, debido a que el dominio tecnocrático, tanto en la especificidad acotada del campo intelectual como en el conjunto de la sociedad sometida a su amplio poder de determinación en materias políticas y económicas, es el resultado de una polaridad política resuelta a su favor, en desmedro de otras alternativas culturales y sociales³. Pues bien, lo que se hace a continuación es aplicar este enfoque analítico a un caso específico: la experiencia argentina.

1. La crisis desarrollista y el asalto de la intelectualidad empresarial

El “Proceso” argentino, parte de la oleada de golpes militares en América Latina cuyo objetivo fue romper con la dinámica de la política nacional popular (Touraine 1989), tuvo como eje de transformación una política económica abocada a modificar la “estructura industrial protegida” y a reducir la participación de los asalariados en la distribución del producto. Ambas cuestiones, desde la óptica antipopular que orientó al régimen, fueron vistas como las fuentes de la excesiva deuda pública y privada que arrastraba el país desde los años cincuenta. De allí que la solución por la que apostaron los militares y las élites civiles que los acompañaron fue desarticular las bases sociales de las alianzas

³ Para lograr esta visión de conjunto son fundamentales los hallazgos disponibles en otras investigaciones previas, las cuales aquí se usan abundantemente. En términos metodológicos, se articula el análisis documental histórico-interpretativo (Cazares *et al.* 1999) de diversas fuentes primarias (entrevistas de prensa y ensayos políticos de intelectuales clave) y secundarias impresas.

populistas promovidas por el peronismo, mediante su exclusión de los procesos de construcción estatal y de la definición de sus políticas (Ruiz 2019).

Acompañando a la violencia política, esa iniciativa se fraguó en las oficinas del Ministerio de Economía. Fue durante la prolongada gestión del ministro José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981) que se intentó un viraje estatal hacia el capital agroexportador y financiero, a través de medidas de liberalización del mercado interno que buscaban acrecentar la vinculación con el exterior (Rapoport 2010). Sin embargo, a pesar del esperanzador equilibrio macroeconómico logrado en un comienzo, el desenlace fue un estallido económico que, en la Argentina, operó como trasfondo de la más amplia “crisis de la deuda” que afectó a la región latinoamericana en su conjunto. Dicho caos a nivel económico, sumado a la derrota en Malvinas y la movilización popular por las alzas salariales y en contra de las violaciones a los derechos humanos, acabó con la dictadura, quedando como herencia una debacle económica que, entre otros síntomas, contaba una altísima deuda externa y una crisis social generada por la drástica caída de los salarios, hiperinflación y altas tasas de desocupación y pobreza (Rapoport 2010).

Más allá de este fracaso, entre los hechos a destacar dejados por la gestión cívico-militar se encuentra la activa participación de una nueva intelectualidad tecnocrática en el seno del Gobierno. Ante las exigencias impuestas por el deterioro económico, ella participa en el equipo de Martínez de Hoz actuando con relativa autonomía y a contrapelo de los principios del liberalismo vernáculo argentino. En efecto, pese a que el gabinete económico había promovido al inicio un plan de recuperación de los ingresos del Estado por la vía de una apertura comercial que disminuyera la protección arancelaria de ciertos bienes, tras la subida de la inflación a tres dígitos en 1978, radicaliza su postura: la forma que se propone para resolver el problema del incremento de los precios es contraer la oferta monetaria a través de la reducción del gasto público (Heredia 2015). Una medida que, sin embargo, exigía racionalizar la administración pública, reducir la inversión en infraestructura y privatizar empresas estatales, generando por ello la oposición de los sectores más estatistas de la Junta Militar, liderados por

el almirante Massera. Estos últimos sospechaban que un empequeñecimiento de las reparticiones públicas aumentaría radicalmente el desempleo, ahondando el desprestigio de un gobierno ya cuestionado en otros frentes (Canelo 2004).

Ante tal escenario, la continuidad de Martínez de Hoz dependía de un plan alternativo que permitiera aunar criterios. Este llegó de la mano de un grupo de jóvenes economistas recién integrados al equipo de asesores del ministro, quienes, haciendo gala de una alta sofisticación teórico-empírica, propusieron un programa económico enfocado en la balanza de pagos y la fijación de algunos precios clave y no, como solía hacerse en esos momentos, en el control de la cantidad de dinero. De este modo, bajo la doble promesa de reducir la inflación y de estimular el crecimiento, la “tablita cambiaria”, como se conoció al primer experimento monetarista en suelo argentino, inició su breve derrotero, sobre la base de declarar devaluaciones de la moneda siempre por debajo de la tasa de inflación prevaleciente (Heredia 2015). Un camino infortunado, por cierto, que acabaría a los pocos meses, pero que permitió a aquellos jóvenes tecnócratas ubicarse por primera vez al frente del poder gubernamental.

Aunque para el ingreso al aparato estatal de dichas tecnocracias fue clave la circunstancia de crisis política que predominaba en la Argentina durante los años setenta (Sidicaro 2010), el episodio constituye, en perspectiva histórica, el punto de llegada de un curso más amplio de mutación del campo intelectual argentino, con alcances latinoamericanos. En efecto, su irrupción se inscribe en el proceso de “norteamericanización” de la economía mundial, cuya forma en América Latina es la de una reacción a la hegemonía intelectual de la escuela económica “estructuralista”. Dicha corriente, vinculada directa o indirectamente a la producción intelectual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Villarreal 1986), había logrado difundirse, desde los años cincuenta, a través de las políticas de planificación y de integración regional de esa institución. Ella, como se sabe, influyó transversalmente entre los economistas y científicos sociales latinoamericanos tras la Segunda Guerra Mundial, gracias a la difusión de una idea global de desarrollo económico y una serie de programas de capacitación orientados al conjunto de la

región, que vino, en muchos casos, a llenar un vacío entre universidad y realidad nacional (Montecinos 1997) que se replicaba en muchos países y que perjudicaba su manejo económico.

Como contracara, la resistencia a esta hegemonía intelectual se inició durante la misma década de 1950 a partir de acusaciones de la tendencia monetarista contra la supuesta irresponsabilidad de los “malos economistas” del Sur, que buscaban resolver los dilemas económicos de espaldas a la teoría neoclásica, considerada una ciencia universal por la corriente ortodoxa. Esa reacción contó, además, paulatinamente, con el apoyo financiero del Gobierno estadounidense, de agencias internacionales y fundaciones extranjeras y con la colaboración de instituciones académicas y grupos de élite locales, que buscaron influir en la educación superior de los países latinoamericanos. Su resultado, sobre todo en el campo de la economía, se materializó en el ofrecimiento de programas de economía a nivel graduado y de programas de postgrado en prestigiosas instituciones neoconservadoras, como la Universidad de Chicago (Montecinos 1997).

Lo anterior derivó, en países como Argentina y Chile, en el establecimiento de circuitos especializados de difusión de esta perspectiva ortodoxa, contraria al estructuralismo cepalino, que incluyó a académicos, funcionarios de agencias internacionales y de gobierno, periodistas y operadores de mercado, todos los cuales fueron instruidos en los saberes que la academia norteamericana difundió globalmente como parte de su estrategia diplomática anticomunista (Neiburg 2005). Aquel circuito global, además, rodeó a esos cuadros intelectuales, y en particular a los economistas, de un halo de prestigio profesional crecientemente mayor al de sus pares formados en universidades nacionales, al serles más fácil el acceso a redes de financiamiento internacional e instituciones multilaterales, cada vez más importantes para el devenir económico latinoamericano (Camou 1998).

Ahora bien, en ese contexto regional, lo propio de la Argentina se liga a dos elementos. En primer lugar, a que el nexo de los estudiantes locales con el saber económico global fue impulsado, en su mayoría, por centros de pensamiento privados y no por universidades, siguiéndose el modelo precursor del Instituto Torcuato Di Tella (Plotkin y Neiburg 2005). Dichas entidades financiaron estudios de postgrado

en el extranjero y generaron puentes con agencias internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, luego claves en la negociación de la deuda externa argentina.

En segundo lugar, el caso argentino se caracteriza porque la formación internacionalizada de los economistas monetaristas tiene el sello empresarial, al ser apoyada desde sus inicios por gremios patronales nacionales y regionales, que auspiciaron la creación de centros de pensamiento, conforme a su interés por intervenir en el debate de ideas contra las propuestas del peronismo y de la izquierda. Dichas instituciones apoyaron tanto la formación profesional de nuevos cuadros en el campo de la economía, como la elaboración y ejecución de políticas económicas durante la dictadura y los gobiernos democráticos de Alfonsín y Menem. Este es el caso de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), nacida con el apoyo de las principales patronales del país, y que proveyó la mayoría de los cuadros tecnocráticos que acompañaron a Martínez de Hoz; del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA), cuyos fundadores, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, figuras importantes en los gobiernos de la etapa democrática, participaron también en el equipo económico de la Junta Militar, asesorándola en el enfoque monetario de la balanza de pagos; y de la Fundación Mediterránea (FM), de gran proyección en los decenios de 1970-80, cuya figura central es Domingo Cavallo, recordado ministro de Economía de Menem, que, sin embargo, con anterioridad, participara como asesor y funcionario en otras instancias claves de decisión económica como el Banco Central Argentino (Ramírez 2007, Heredia 2012)⁴.

El sentido último de estas instituciones culturales fue servir de plataforma para potenciar la proyección de las tecnocracias monetaristas en el aparato del Estado y en los gabinetes de los Gobiernos argentinos, desde la dictadura a la democracia, en un proyecto cuya lógica retrata el propio Cavallo en sus memorias:

La idea de ellos [Fulvio Pagani y Piero Astori, empresarios de la industria alimenticia y de la construcción, que fundan la Fundación Mediterránea] era crear una corriente de opinión desde Córdoba, y desde

⁴ Todas estas organizaciones siguen vigentes hasta hoy, convirtiéndose, con éxito disímil, en las principales consultoras económicas del mundo privado y, en especial, las grandes empresas privadas argentinas.

el interior del país, favorable a los cambios que debían darse en las reglas del juego de la economía. Ellos pensaban que obviamente esto se haría finalmente desde la política. Por ejemplo, la obsesión de Astori –y en alguna medida también de Pagani– era identificar a los líderes políticos y económicos del futuro. Y así como él “apostaba” a mí como economista, apostaba a Fernando de la Rúa como político, y apostó a Carlos Menem también (...). Mi propósito era organizar un equipo, que yo ya tenía en mente porque era el mismo con el que habíamos venido trabajando en la Universidad y en la Provincia. Enriquecer ese equipo, o reforzarlo con gente joven, con los mejores estudiantes que fuésemos detectando en la Universidad, para estudiar los temas con un sentido muy práctico, es decir, para pensar las soluciones a los problemas. Y hacerlo escribiendo trabajos que pudieran presentarse en los ámbitos académicos, pero que fundamentalmente sirviesen para la discusión con los empresarios, incluso con los dirigentes gremiales [sindicales], por supuesto con las autoridades políticas, y sobre todo que sirviera para el debate público. (Cavallo 2001: 95-96)

En los convulsionados años ochenta, la clave político-intelectual sobre la que se produjo esta intervención organizada en el debate de ideas, y de la cual son animadores las grandes personalidades tecnocráticas que encabezan el proceso de reformas de la década siguiente, es la cuestión inflacionaria. Como han indicado investigaciones recientes, la inflación no alcanza un estatuto de importancia en el debate público argentino sino hasta mediados de los años sesenta, cuando la subida de los precios se torna persistente e incluso se agrava en cada nuevo año fiscal (Neiburg 2005). Su relevancia para el manejo económico siguió siendo marginal y únicamente fue defendida por una minoría ligada al pensamiento liberal, manteniéndose encerrada en la discusión especializada. Ello se explica tanto por el escaso desarrollo empírico y teórico sobre el tema, como por la ya mencionada hegemonía intelectual de la escuela estructuralista, para la cual el verdadero problema nacional era el desarrollo (Heredia 2015). En efecto, para el estructuralismo cepalino la inflación se situaba dentro de una problemática mayor, como la debilidad de la estructura productiva y de las relaciones comerciales con el exterior. Por este motivo, el aumento inflacionario se imputaba a las contradicciones entre el dinamismo del sector industrial, volcado a sustituir importaciones, y el relativo estancamiento del sector agropecuario, orientado a la demanda interna y

externa y único capaz de obtener divisas. Desde allí, entonces, se definía que la raíz estructural de la inflación se encontraba en los desequilibrios cíclicos de la balanza de pagos y en la puja distributiva entre diversos sectores sociales (Pinto 1976).

Por el contrario, para las voces del liberalismo económico argentino, influyente en el período post-1955 y hasta los años ochenta (Sábato y Schvarzer 1983), la inflación se vinculaba al “dirigismo” estatal, generador de un exceso monetario relacionado con una emisión irresponsable del Estado, que gasta más allá de sus ingresos, en particular en aumentos salariales cuyo origen es político (Heredia 2015). En esa lógica, la inflación sigue subsumiéndose en el objetivo de largo plazo del desarrollo nacional, incluso como un componente sacrificable para lograr esa meta, en base a la preeminencia de un Estado que fija las reglas y el recelo a abrir los mercados al exterior (Sidicaro 2010).

Pero con la irrupción de las ideas monetaristas, con el episodio señero de la “tablita cambiaria” entremedio, se desata un quiebre ideológico en la oposición intelectual al estructuralismo cepalino, al elevarse el problema inflacionario a uno de importancia por sí mismo, más allá de los objetivos del desarrollo. Esta renovación ideológica coincide con un escenario político en la Argentina de creciente fragmentación de la “alianza desarrollista” que había predominado buena parte del siglo XX, producto de los esfuerzos de ampliación de su base económica que llevaba adelante el sector industrial, en vinculación con el sector exportador y financiero que venía creciendo en el país desde los años sesenta, sobre todo como mecanismo de las clases dominantes para salvaguardar sus beneficios de la puja distributiva con otros sectores sociales (Sábato y Schvarzer 1983), en medio de la activación popular creciente que se producía en la sociedad argentina, también con la reticencia de los sectores medios, resultado de la tendencia decreciente que exhibe el modelo económico desarrollista en toda América Latina (Cardoso y Faletto 1969).

La inflación, por lo tanto, más allá de su interpretación teórica, encubría –no solo en la Argentina, pero sí allí con fuerza distintiva– la forma de procesamiento político y disputa social central sobre la cual los sectores medios y populares habían obtenido las conquistas sociales que disfrutaron en tiempos del “Estado de Compromiso”.

Algo que, desde el punto de vista económico y sistémico, se expresaba, fundamentalmente, como una pugna porque la acción del Estado y los resultados del crecimiento económico favorecieran con mayor fuerza a los ingresos de los asalariados o de los no asalariados (Sábato y Schwarzer 1983). Se trataba, así, de un conjunto de contradicciones que ya no podían solucionarse con las herramientas económicas a la mano (Faletto y Kirkwood 2016).

Al arribar Raúl Alfonsín al poder en 1983, y pese a las expectativas democráticas que generó su discurso centrado en la política, se profundiza la crisis económica y social heredada del “Proceso”. Ese escenario redundaba no solo en el errático rumbo que adopta su gobierno, sino también en el hecho de que se produzca un traspaso de funciones a grupos ajenos a la militancia radical (Sidicaro 2010), que fortalece la capacidad de intervención del gran empresariado, sobre todo de origen nacional. Esto último ocurre en consonancia con la debilidad de las formaciones sindicales del peronismo, en un curso que ahonda la incidencia del actor empresarial hasta el punto en que la agudización de las pugnas internas entre los grupos económicos (industrial, agrario y financiero, extranjero y local) condiciona, sin oposición real, las políticas económicas del Poder Ejecutivo (Ruiz 2019). Y es que, como ha indicado Beltrán (2006), la heterogeneidad interna de este actor no evitó su unidad detrás de un diagnóstico común sobre la inflación, iniciándose una amplia ofensiva pública para promover la reducción del tamaño del Estado, la apertura de la economía a la competencia externa, la privatización de empresas públicas, la desregulación de la economía y la introducción de un sistema de reglas claras.

De este modo, bajo la creencia que cada sector empresarial tenía respecto a cómo se beneficiaría con una reforma que implicara la retirada del Estado, se extendió un discurso antiestatista común cuya retórica neoliberal fue usada por los empresarios para presentar y justificar, en el campo político, sus demandas corporativas al presentarlas como parte de un proyecto más amplio. Esto se irá consolidando al transcurrir la década, a partir del espacio ganado por los economistas monetaristas en el debate político, al perfilarse sus propuestas como las mejor preparadas para atender la crisis, ante la ineficacia de las recetas estructuralistas para enfrentarla (Villarreal 1986).

El primer hito que apoya este avance es el cambio del ministro radical Grinspun, al frente del Ministerio de Economía, tras el fracaso de su plan de reactivación basado en el distribucionismo nacional popular. Su reemplazo, Juan Sourrouille, de perfil no partidario, apostó, en cambio, por una reactivación económica sustentada en el sector exportador. Para ello, se hizo acompañar por un equipo de tecnócratas independientes ligados al CEDES y al IDES⁵, que adscribían en su mayoría a la corriente estructuralista (Pavón 2012). Este grupo, que también fracasó en su intento por controlar la crecida inflacionaria es, asimismo, el que encabezó un duro enfrentamiento público con los cuadros monetaristas en la segunda mitad de los años ochenta. En esa ocasión, en encuentros disciplinares y de la gran empresa, en los medios de comunicación y dentro de los propios partidos políticos, se desarrolló un debate sobre la cuestión inflacionaria que marcó nítidamente las diferencias entre estructuralistas y monetaristas (Heredia 2006), alcanzando resonancia pública en una sociedad argentina que ya había internalizado, debido a su experiencia cotidiana de supervivencia frente a la crisis, la relación entre desequilibrios macroeconómicos y efectos sobre la reproducción social (Neiburg 2005).

En el curso de estos debates, y sobre todo a causa de la falta de alternativas políticas y la persistencia de la crisis, se fue imponiendo, más allá de las discrepancias, un común acuerdo respecto a la necesidad de una acción inmediata que dejara en segundo plano los fines de largo plazo. La velocidad de los hechos políticos y el caos económico acercaron a ambas corrientes de economistas profesionales hasta el punto de asumir ambos bandos una perspectiva común: la necesidad de alivianar de posturas políticas e ideológicas los asuntos económicos (Heredia 2015). De este modo, en los marcos del debate experto, se propició la separación entre economía y política bajo la apelación a un “realismo” tecnocrático que, legitimado en el carácter científico de la disciplina económica, pasó a defender la idea de que ambos campos son irreductibles el uno del otro.

⁵ Fundado en 1958 por el economista Aldo Ferrer, el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) ha servido como espacio de confluencia y discusión para buena parte de la intelectualidad progresista argentina y latinoamericana. En torno a dicho organismo, además, desde los años setenta se funda una serie de institutos de investigación financiados con fondos internacionales, que alcanzan gran influencia en democracia: el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA).

Lo anterior quedó plenamente retratado el 12 de abril de 1985, cuando Alfonsín, en un discurso dado desde los balcones de la Casa Rosada, llama a sus compatriotas a vivir una “economía de guerra” (Díaz 2018). La política parecía entorpecer cualquier salida de la crisis y los tiempos políticos parecieron afirmarlo: ese mismo año, la escalada inflacionaria anulaba cualquier política de largo plazo basada en la redistribución, estabilización y reactivación o, al menos, esa fue la opinión que predominó entre los analistas (Heredia 2006). La perspectiva “estructuralista” de largo plazo, fundamentada en la dinámica social y política de los países, debido a su fracaso para hacer frente a la crisis, fue mudada de modo paulatino por soluciones de otra índole, más inmediatistas y centradas en los aspectos monetarios de la economía. Se produjo, así, su reemplazo, fundamentalmente porque se desplazó a un segundo plano la discusión sobre el modelo de desarrollo. Es decir, sobre cómo se incrementa el producto social y se distribuye a partir de pactos sociales entre los actores que intervienen en el proceso democrático. Pasó a negarse la deliberación ciudadana como momento de creación de los lineamientos económicos, en un escenario en que, como se ha dicho, los monetaristas tenían una ventaja insoslayable: poseían la llave para negociar con los intereses empresariales, de los cuales habían nacido décadas atrás.

En adelante, el discurso contra el Estado y el “estatismo”, convertido en un discurso contra la política como tal al conjugarse en la Argentina con el enfoque monetario sobre la inflación, se erige como condición de posibilidad para salir de la crisis. Una apuesta que, siendo incongruente con la propia dependencia estatal del empresariado argentino (Bernal 2006), fue apoyada por los gremios patronales y los grandes grupos económicos, pues entregaba la oportunidad de controlar el poder público que, como había demostrado el transcurso del siglo XX, podía servir también para redistribuir el crecimiento económico entre los asalariados organizados, fundamentalmente peronistas. De tal suerte, y como en ocasiones anteriores, agudizar el caos económico, incluso contra lo que los propios militares advirtieran en la época de Martínez de Hoz, se convirtió en un escenario favorable para acrecentar el poder empresarial, pese al deterioro económico general (Sábato y Schvarzer 1983). En un escenario, además, de creciente peso de la actividad especulativa, en donde los beneficios muchas veces

provenían de las variaciones de los precios relativos, una alta inflación y un menor poder estatal azuzaban la acumulación financiera. Las tecnocracias económicas, en su rol, contribuyeron a viabilizar este curso de acción que, a la postre, derivó en mayor inestabilidad política.

El Plan Austral de 1985 lo refleja, puesto que, al insistirse en el apoyo al sector empresarial exportador con la creación de una nueva moneda, el congelamiento del tipo de cambio y de la mayoría de los salarios y precios, se anticipó el carácter drástico e intempestivo de las medidas que comenzarían a adoptarse. Unas para las que la sociedad argentina parecía estar preparada, al integrar con cada vez más facilidad la *lingua franca* de las tecnocracias económicas, que desde 1985 desarrollaron una fuerte campaña mediática (Heredia 2015)⁶.

Tras dos años, sin embargo, y pese a los esfuerzos de Sourrouille y el alfonsinismo, el Plan Austral fracasó. La profundidad de la crisis, así como la resistencia organizada de las fracciones obreras, diluyó la apuesta empresarial por el momento. Más aún, Alfonsín debió incorporar a sectores más conciliadores al Gobierno, aumentando los salarios y precios del sector público, lo que desató la reacción de un empresariado cada vez más subordinado a los grandes grupos económicos (Bernal 2006). Pero si en el caos económico de fines de los ochenta la pugna distributiva se cargó del lado de los asalariados, siguió su curso el principal cambio estructural forjado en esos años: la aparición de una nueva marginalidad urbana, surgida de la pauperización de los sectores medios y populares afectados por la crisis y la pérdida de los beneficios ligados a sus ocupaciones (Rapoport 2010). Una situación que tendría consecuencias políticas relevantes, al convertirse esa multitud en la base de apoyo del menemismo para las elecciones presidenciales de 1989.

2. La fragmentación peronista y su intelectualidad “renovadora”

La alianza política que llevó al poder a los militares tuvo como eje de acción la desarticulación de las bases sociales del peronismo, concentrando la represión en los miembros del movimiento sindical argentino

⁶ Según Camou (2006), los economistas profesionales triplican sus intervenciones en la prensa entre 1985 y 2005, al tiempo que los graduados de universidades extranjeras y *think tanks* reemplazan a los representantes de organizaciones civiles y políticas.

(Ruiz 2019). Ello redujo la actividad sindical y la importancia política de sus dirigentes (Romero 2012), al tiempo que el deterioro en la estructura productiva y del empleo contribuyó a desarticularlos gremialmente (Sidicaro 2010). Así, al llegar los años ochenta, el debilitado tejido social y laboral que se había reactivado a nivel nacional en 1979 lo hacía con menos afiliados, pocos recursos económicos y escaso reconocimiento político. Además, junto con los cambios estructurales, las referencias simbólicas de la identidad peronista tambaleaban, toda vez que su historia reciente estaba plagada de hechos de violencia, que tanto la izquierda como la derecha del movimiento habían reivindicado en su momento como arma política (Pavón 2012).

La oposición política, por su parte, no contribuía a mejorar el escenario. Alfonsín y el radicalismo redefinían los términos del debate, designando como responsables de la represión autoritaria a un supuesto “pacto militar-sindical”, que puso en jaque a varios jefes sindicales del Partido Justicialista. Pese a ello, en el seno del movimiento peronista el poder de los sindicatos siguió predominando en la designación de candidatos y líneas de acción, ahora, además, debido al debilitamiento del ala partidaria del movimiento (Sidicaro 2010).

La derrota del candidato peronista Ítalo Luder a manos de Alfonsín en las elecciones presidenciales de 1983 generó una crisis al interior del peronismo, siendo acusada la dirigencia sindical de poca ductilidad para ampliar las alianzas políticas (Sidicaro 2010). Dicha caída aceleró el desencuentro que internamente sostenían algunas facciones con los sectores más ortodoxos vinculados al pasado de derechización del movimiento. Esto dio lugar a un movimiento renovador, que nucleó a un heterogéneo grupo de dirigentes peronistas y que fue impulsado, a nivel nacional, por importantes dirigentes de base como Antonio Cafiero, Carlos Grosso y Carlos Menem. La Renovación Peronista, como se lo denominó, nació oficialmente en 1985, declarando la necesidad de replantear la conducción del movimiento y de forjar un recambio político generacional, en donde la dirigencia política predominara por sobre los sindicalistas (Garategaray 2013).

El antecedente intelectual de esta tendencia fue la revista *Unidos*. Surgida en 1983, bajo la dirección de Carlos Álvarez, en ella convergieron miembros disidentes de la dirigencia política justicialista e

intelectuales afines al peronismo que intentaron articular un discurso de síntesis entre los valores nacional-populares (nación, unidad, liderazgo y pueblo) y los democrático-liberales (consenso, deliberación, democracia representativa y Estado de derecho) (Garategaray 2013). Su trabajo se orientó a los objetivos de transformar el movimiento peronista en un partido político con estructuras normales –la “revolución de las formas”, le denominaron (Pavón, 2012)– y de democratizar todos los espacios internos. Ello se veía como un paso necesario para contribuir a las aspiraciones democráticas de la sociedad argentina. Aquello significaba abandonar las liturgias tradicionales, adoptar el parlamentarismo democrático y disminuir el peso de los sindicatos en la toma de decisiones (Sidicaro 2010). Esto último asociado a las presiones corporativas.

Unidos vino a cubrir la ausencia de un pensamiento progresista al interior del peronismo, a la vez que hizo posible que el movimiento incorporara entre sus filas a hombres de las ciencias sociales, de la filosofía y de otras disciplinas, que pertenecían a la academia y se ligaban a la política (Sigal 1991). A diferencia de las etapas de Perón, el “peronismo renovador” fue capaz de producir intelectuales propios, aun cuando los mismos tuvieron tanto o menos éxito que aquellos que incorporara el peronismo original, luego marginados del poder por el líder carismático (Fiorucci 2011). Como señala el sociólogo Horacio González, participante de este espacio:

[L]a Universidad justo en ese momento retomaba la sociología que había sido interrumpida, se creaba la carrera de ciencias políticas. Entonces ahí apareció todo lo que el alfonsinismo leía, que era lo mismo que leíamos nosotros, es decir fuimos los alfonsinistas del peronismo (...) esto presupone distintos tipos de críticas a la razón populista. De modo tal que la revista *Unidos* impresiona como intento de jugar dos lenguajes: el de un peronismo democrático y el de la teoría de la participación social y de la democracia con determinación, que era lo que se discutía en esa época (...) pretendía crear un lenguaje político que en ese momento no existía en Argentina. (Citado en Pavón 2012: 203)

La revista acompañó el intento renovador y le dio una dimensión intelectual que, paradójicamente, no tenía la Renovación por sí misma (Pavón 2012). Esto, por cuanto el intento por rearticular internamente

a las dirigencias políticas tenía como intención final, partiendo de la crítica política y programática, impulsar un espacio para volver al poder (Sidicaro 2010). La dimensión intelectual, por otro lado, provenía del diálogo que, a través de la publicación, se generó entre peronistas renovados –sobre todo intelectuales– y otras culturas políticas, fundamentalmente la izquierda socialista (Pavón 2012). Así, la Renovación, casi sin proponérselo, conformó un intento de adaptación a las nuevas condiciones sociales y políticas del momento (Sidicaro 2010), favorables a la democracia y el liberalismo, producto del impacto que genera el triunfo de Alfonsín y que justifica este intento de reformulación de la identidad política peronista, también llevado adelante, como se verá, en el radicalismo (Aboy Carlés 2001).

El éxito de este esfuerzo político pareció consolidarse cuando, a la par del declive de la popularidad sindical, en 1987 el movimiento renovador se impone en las elecciones legislativas (Garategaray 2013) a un alfonsinismo acosado por sucesos de activación militar y violaciones a los derechos humanos –el alzamiento carapintada de Semana Santa y la Ley de Obediencia Debida–, una escalada de huelgas encabezada por la CGT de Saúl Ubaldini y la propia crisis económica. En esa oportunidad, mientras Carlos Menem se reelegía gobernador por La Rioja, Antonio Cafiero ganaba en la provincia de Buenos Aires. Un triunfo que desató una disputa entre ambos por convertirse en el próximo candidato presidencial peronista.

En efecto, la primaria que los enfrentó en 1988 constituyó un punto de inflexión para la Renovación y su ala intelectual, que crecía en su ambición por concebir un proyecto alternativo junto a los socialistas. Y es que, mientras Cafiero se mostró como el candidato más renovador, Menem, anticipando la correlación de fuerzas consolidada al interior del propio peronismo, utilizó aquello, así como la cercanía de su contrincante con Alfonsín, para atacarlo, alertando sobre la posibilidad de que la Renovación se mimetizara con el alfonsinismo (Garategaray 2013), algo ya presente en la discusión interna del movimiento:

El peronismo no va a poder plantear una comprensión propia, una redefinición distintiva, si no reencuentra el recorrido real de su participación en la trama histórica cultural: esa que lo lleva a su crisis final. No va a poder discutir con fortuna los propósitos del presidente radical si entra también en el juego de esconder al peronismo (...) Si

se le sigue otorgando a la interpretación alfonsinista la potestad de nuestra ausencia como historia desgarrada, y como desgarradora de la Historia. (Casullo 2008: 230)

Menem también utilizó una serie de dicotomías que reducían el espacio político: la oposición del centralismo de Buenos Aires frente al federalismo y los intereses del interior; frente al carácter intelectual de Cafiero, opuso el carácter plebeyo del peronismo y de sí mismo como representante del pueblo; frente a la razón, el carisma, y frente a la institucionalización del movimiento en partido, la defensa del carácter movimientista del peronismo (Garategaray 2013).

Por último, Menem utilizó la propia debilidad del proyecto de la Renovación, en relación con el hecho de que la discusión ideológica no había logrado poner fin al peso efectivo del sindicalismo al interior del peronismo, tornándolo fundamental para ganar cualquier elección. A este respecto, la pérdida de poder que suponía para el sindicalismo la institucionalización y democratización interna del peronismo, propugnada por la Renovación, le granjeó a Menem el apoyo de los sindicatos más grandes (CGT Azopardo y la 62), convergiendo en su candidatura la mayoría de los dirigentes sindicales y caudillos partidarios de la provincia de Buenos Aires, liderados por Eduardo Duhalde (Sidicaro 2010), quien fue su compañero de fórmula para la vicepresidencia.

De este modo, el intento de la Renovación cayó a manos de uno de sus fundadores. Y así, si el “peronismo renovador” asumió el diálogo y buscó abandonar la táctica de deslegitimación del adversario para contribuir –siguiendo el lema alfonsinista– a una “consolidación democrática”, la propuesta de Menem resignificó la obra de Perón y, antes que apelar a estructuras decisionales democráticas, reactualizó la necesidad de liderazgos caudillistas que, a su juicio, la “patria peronista” necesitaba:

Es un tiempo para las sanas rebeldías, la recreación de esperanzas, las audaces utopías... se trata de escuchar la voz del Pueblo que siempre es la voz de Dios (...) El hombre argentino ha señalado su camino (...) Quienes se resisten a ver esta esencia, con la excusa de asumir posturas pseudomodernistas o intelectualoides, están faltando a una responsabilidad histórica y pretenden convertir al justicialismo en un simple partidito liberal. (Citado en Garategaray 2013: 52)

En suma, aun cuando el peronismo se encontraba desarticulado y sus bases sociales e ideológicas debilitadas a fines de los ochenta, la situación terminal del alfonsinismo, y con ello de buena parte del radicalismo, posicionó al primero como único actor político en condiciones de negociar los intereses argentinos. Pero, ¿qué peronismo? En lo inmediato, el triunfo de Menem en la precandidatura justicialista generó un reacomodo de las fuerzas internas en torno a su figura, tanto a nivel de cuadros políticos como técnicos, que pasaron a integrar su comando de campaña. De este modo, a fines de 1988 se conformó una ecléctica Comisión de Economía que lo asesoró, integrada por Domingo Cavallo, Eduardo Curia, Marcelo Diamond, Guido Di Tella, Rodolfo Frigeri y Roberto Lavagna. De ellos, solo Curia era un colaborador habitual de Menem. Di Tella, Frigeri y Lavagna, por su parte, provenían de la facción “cafierista”, mientras que Cavallo era el único independiente, aunque con mayores redes empresariales y con un equipo de cuadros técnicos –provenientes de la Fundación Mediterránea– dispuesto a aterrizar en un eventual gobierno (Pavón 2012), que finalmente se concretaría.

A esas alturas, aun cuando estaban en las antípodas de los intereses de la “patria peronista”, la desregulación comercial, la privatización de empresas públicas y la apertura económica comienzan a asumirse como temas que remozan el ideario nacional popular del peronismo clásico. Y aun cuando existen diferencias dentro del equipo de asesores respecto a cómo afrontar a los acreedores externos y agentes internos de la economía (Camou 1998), la hiperinflación que interrumpe el mandato de Alfonsín acelera y asegura el rol de intermediarios de los economistas profesionales con los intereses políticos y comerciales de organismos multilaterales, empresarios, sindicalistas y operadores financieros.

Por otro lado, lo que pudo ser una renovación del peronismo fue aplastada por la desalentadora pero cierta constatación de que quienes se resistían a la modernización partidaria eran numéricamente más que los que empujaban una renovación. El triunfo en los comicios internos de la “antiélite menemista” (Sidicaro 2010), paradójicamente, abrió una nueva puerta a la intelectualidad empresarial, que además de las presiones corporativas, logró introducir toda una camada de técnicos y profesionales encargados de comandar el giro neoliberal en la Argentina.

3. La intelectualidad socialista y la democracia imaginada

A inicios de los años 2000, la escritora Beatriz Sarlo recordaba: “lo que a mí me encuentra profundamente sin presupuestos es la revolución conservadora neoliberal. Nos tomó sorpresivamente. Lo que digo es que lo que se esperaba de Menem no era bueno, pero no era lo que vino” (Pavón 2004: s/n). En la sentencia de Sarlo, además de resumirse el desconcierto que provocó el giro neoliberal entre la intelectualidad socialista argentina, asomaba el estado de debilidad estratégica en que se encontraba a fines de los años ochenta un sector político que, de la mano de sus intelectuales, también había buscado, como el peronismo, renovarse en el tránsito de la dictadura a la democracia. En términos generales, en dicha debilidad había cumplido un papel importante el desplazamiento que el campo político-intelectual del país experimentara tras el último golpe militar.

El principal movimiento de inicios de la transición fue liderado por un importante sector de la izquierda intelectual de los años sesenta y setenta, que desarrolló sus debates en dos revistas fundamentales: *Controversia*⁷ (1979-1981) y *Punto de Vista*⁸ (1978-2008). La primera, heredera de la cordobesa *Pasado y Presente*, nucleó a los socialistas gramscianos que confluyeron en el exilio mexicano y a algunos miembros del peronismo revolucionario. Para esta revista, el reconocimiento de la derrota constituía el punto de partida para toda reflexión política y cultural posterior, de manera que la autocrítica alcanzaba no solo al accionar, sino también a los instrumentos teóricos usados (Pavón 2012). Confluyen en los intereses de estos intelectuales tanto la crisis de los modelos de transición al socialismo, como la forma específica que adoptaba el asunto de la transición a la democracia en la Argentina. De allí que aparezcan como temáticas centrales de la revista cuestiones como la crisis del marxismo, el análisis de la izquierda argentina y latinoamericana, el peronismo, la redefinición de la labor intelectual en democracia y el exilio. Por su parte, en *Punto de Vista* se apostó por poner en circulación otros discursos –abarcando desde

⁷ Ejerció como director Jorge Tula, mientras su Consejo de Redacción estaba integrado por José Aricó, Carlos Abalo, Sergio Bufano, Rubén Caletti, Nicolás Casullo, Ricardo Nudelman, Juan Carlos Portantiero, Héctor Schmucler y Óscar Terán.

⁸ Sus fundadores fueron Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano.

la crítica cultural y la teoría literaria hasta la reflexión sociológica—, que en sí mismos podrían implicar formas de resistencia al silencio autoritario (Patiño 1997).

Al abrirse la etapa democrática, por tanto, ya existía una autocrítica consolidada respecto al pasado reciente de la izquierda argentina, lo que llevó a intentar establecer nuevas coordenadas teóricas y prácticas sobre las cuales pensar la disputa política. Ello implicó cuestionar el camino revolucionario, el modelo del intelectual comprometido y la propia tradición ideológica —en general, dentro del marxismo— que se asumiera antaño (Elizalde 2009). De este modo, al regresar a la Argentina los intelectuales en el exilio mexicano, se formó en 1984 el Club de Cultura Socialista, como espacio para la convergencia de ambos grupos intelectuales en torno a los valores de la democracia, el pluralismo, el tratamiento de las diferencias y el respeto por las minorías, así como del Estado de derecho (Elizalde 2009). El objetivo era realizar una revisión histórica y conceptual que permitiera avanzar en la conformación de un pensamiento socialista “renovado”, cercano al paradigma democrático y que pudiera ponerse al servicio de una visión alternativa para lograr el cambio político (Patiño 1997).

Mientras avanzaba aquello, en la política argentina Alfonsín iniciaba su gobierno defendiendo un proyecto que se planteó en términos de una doble ruptura: con el pasado y con los actores de ese pasado (Vommaro 2006). Aquello coincidió con la autocrítica del naciente socialismo “renovado”, acercándose por ello al presidente. Alfonsín llegaba al poder declarando el objetivo de reconstruir la “patria imaginada” y de darle unidad a un país arrasado por una crisis social y política profundizada por los militares (Aboy Carlés 2001). En ese intento, el mandatario buscó estrechar lazos con personalidades del mundo de la cultura y de la academia, para así dar mayor estatura intelectual a su proyecto. Un esfuerzo que realizó por fuera de su partido, debido a la debilidad de este, que no era sino síntoma del agotamiento general de las fuerzas políticas argentinas tras la dictadura. El grupo Esmeralda constituyó el resultado de este esfuerzo, conformándose un heterogéneo e inorgánico elenco que gravitó en las decisiones presidenciales a partir de su acción en dos frentes: el trabajo de medios, la evaluación de la imagen presidencial y la opinión pública, y desde la elaboración de ideas que sirvieron para construir sus discursos públicos (Elizalde 2009).

Parte importante de los técnicos y profesionales reclutados para estas tareas provino, como se viera más arriba, de instituciones culturales independientes como el CISEA, el CEDES y el IDES (Pavón 2012). Asimismo, aunque se trató en lo fundamental de colaboraciones individuales y acotadas que no necesariamente suponían tratar de manera directa con Alfonsín, la participación de miembros pertenecientes al Club de Cultura Socialista, como los sociólogos Juan Carlos Portantiero y Emilio De Ípola, conectaron al mandatario con las ideas discutidas al calor de las reuniones semanales que mantenía el club y con los debates que sus miembros mantenían en la prensa.

Elizalde (2009) ha indicado que lo que posiblemente vinculó al campo intelectual con el político durante estos años fuera la propia figura de Alfonsín, y sobre todo la expectativa de este respecto a perfilar un proyecto de democratización política de nuevo cuño, sobre el cual los socialistas mostraban su convencimiento. En efecto, como indica Carlos Altamirano, fundador de *Punto de Vista* y participante del Club de Cultura Socialista: “el alfonsinismo era la izquierda posible en el espacio, que podía operar, obrar contra la imagen de una izquierda confinada exclusivamente en la crítica y la denuncia, y con poca gravitación en el espacio político” (citado en Pavón 2012: 149).

El tema central que vinculó a Alfonsín con los intelectuales socialistas fue la construcción del orden democrático y la relación entre socialismo y democracia. Siendo un tópico desarrollado sobre todo por la fracción exiliada en México, este se formula a partir de la recuperación de la idea de orden, entendiendo la democracia como una de sus formas, cuya particularidad es abrir la posibilidad del disenso. Partiendo de una apropiación de las ideas gramscianas, se apunta al consenso como la realización de aquel orden, pero sin disolver las diferencias, sino reconociendo la posibilidad del disenso y de procesar los conflictos políticos. Algo como esto ya se articulaba en el pensamiento de José Aricó durante su exilio mexicano en el número 9-10 de la revista *Controversia*:

[E]l ideal socialista se sostiene como tal sólo a condición de admitir al método democrático como camino de su efectivización. Sólo así el mundo incontenible de lo diverso y de lo complejo puede abrirse paso de una manera no negativa (...) La pluralización social, y por lo tanto el método democrático de resolución de las diferencias en

eterno proceso de aparición y desaparición (los ‘nuevos sujetos sociales’), aparecen así como los fundamentos sobre los cuales el socialismo puede abrirse paso. (Aricó 1980: 16)

Avanzado el gobierno de Alfonsín, el debate al interior del Club de Cultura Socialista dio vida a la revista *La Ciudad Futura*⁹, convertida en el espacio de divulgación y discusión de las nuevas elaboraciones socialistas, ahora formuladas en una relación directa con la realidad argentina y no desde el exilio. En sus páginas, Portantiero y José Nun plantearon la noción de “pacto democrático”, que Alfonsín difundió como su principal objetivo político durante su famoso discurso de 1985 en Parque Norte. Esta idea sostenía la importancia de que las fuerzas políticas arribaran a un compromiso que, respetando la especificidad de los movimientos sociales, delimitara un marco global desde el cual los conflictos y diferencias pudieran coexistir (Elizalde 2009). Y es que la propuesta de estos intelectuales, y de muchos de su generación, era la configuración de un nuevo concepto de democracia que fuera acompañado por una renovación de la cultura política y nuevas instituciones democráticas. Ello en tanto el diagnóstico era lapidario al recordar la historia política del país:

[L]a democracia representativa como forma de gobierno de partidos jamás existió en la vida asociada de los argentinos. La democracia, o lo que se designaba como tal, fue una forma de gobierno de fuerte impronta cesarista (...) Puesto que durante los escasos y transitorios periodos de democratización que nos tocó en suerte, lo que se daba en realidad era un cesarismo exacerbado, donde la plaza ocultaba la corporativización de los actores sociales (...) [por ello] colocar en un nivel derivado y secundario las formas jurídicas e institucionales de una sociedad, no sólo es un error teórico, sino también el claro indicador de una situación social de neta separación entre Estado y sociedad, entre sociedad política y sociedad civil, entre economía y política. (Aricó 1986: 36)

¿Cuánto de esto fue posible? En realidad, muy poco. Al ser la relación con los intelectuales una iniciativa personal del presidente y, generalmente, no existir relación alguna con la máquina partidista de la Unión Cívica Radical, las ideas difundidas en los discursos no pudieron

⁹ Fundada en 1986 por José Aricó, quien comparte la dirección con Juan Carlos Portantiero y Jorge Tula.

ser implementadas (Elizalde 2009). Si bien el grupo Esmeralda hizo aportes relevantes a los discursos del presidente, sus ideas no estuvieron acompañadas de fuerza política efectiva. Así pues, la convergencia entre la intelectualidad socialista y Alfonsín no tuvo el efecto modernizante que el propio mandatario esperaba para el radicalismo. El socialismo “renovado”, aun cuando tuvo a algunas de sus figuras cerca del poder, no contó con la capacidad política ni el apoyo social para desarrollar su proyecto intelectual.

Producto de esa debilidad política, además, fue sobrepasado por una inestabilidad política y un caos económico que enfilaba al país hacia un giro inesperado al cerrarse los años ochenta. Pese a su creatividad intelectual, sus formulaciones estratégicas y la riqueza de sus aportes teóricos a la renovación del pensamiento sobre la democracia y el socialismo en la Argentina y América Latina, el salto de lo intelectual a lo político se frustró en el camino.

En realidad, la preeminencia del discurso de reinención de la democracia, que apeló a impulsar tanto una democratización política –inexistente después de la década de 1930 en el país– como una nueva cultura política democrática, no tomó en cuenta la profundidad del cambio estructural que estaba produciéndose en la Argentina ni el reforzamiento que ello prodigaba a la vigencia de viejas influencias de la política. Por el contrario, dichas formulaciones ideológicas tendieron a conjugar un excesivo culturalismo y politicismo en torno a la democracia, que les impidió a los socialistas argentinos advertir cómo las raíces estructurales, económicas e ideológicas de la Argentina nacional popular se transformaban a una velocidad inaudita desde la dictadura militar en adelante. Tras el triunfo de Menem en 1989, el propio Aricó lo señalaría en su texto “¿Y ahora qué?”, editorial escrita para la revista *La Ciudad Futura*: “Seguramente la ansiedad de muchos de nosotros por construir un régimen democrático de gobierno en la Argentina, tras décadas de autoritarismo, nos hizo caer en una exageración ‘politicista’, en un desdén por los hechos sociales estructurales sacrificados a una visión demasiado autónoma de la política. Fue un error” (citado en Pavón 2012: 164).

Con todo, lo de la intelectualidad socialista argentina no estuvo centrado solo en una preocupación por los aspectos procedimentales de la democracia, como ocurriera en la mayoría de las experiencias

de transición democrática en la América Latina de los años ochenta y noventa. No obstante, si bien amparó, más allá de los procedimientos, la construcción de una democracia sustantiva en sus formas de representación y participación, las afirmaciones llevadas adelante fueron sobrepasadas por el deterioro socioeconómico de la vida de los argentinos. A ello se sumó su falta de fuerza política, problema histórico del socialismo en la Argentina.

4. Neoliberalismo e intelectualidad: la vuelta al principio por otro camino

La política antipopular llevada adelante por la última dictadura cívico-militar obtuvo resultados parciales, en tanto los militares debieron replegarse a sus cuarteles sin haber solucionado los dos problemas para los que habían sido invocados: refundar el orden político y resolver la crisis del modelo económico desarrollista, agotado desde hacía una década. Esa doble herencia, que durante el gobierno de Alfonsín se profundiza, delimita el espacio y las temáticas que atizan la disputa entre las fracciones de la intelectualidad local, ante la oportunidad que abre la democracia para redefinir los horizontes políticos, tal como se ve en los intentos de renovación que se estimulan en los partidos históricos argentinos.

Expresado de modo específico en la trayectoria de cada fuerza intelectual, la tónica del período es la escisión entre el campo intelectual y el campo político. En el caso de los economistas ligados a los intereses empresariales, esta se enmarca en la paulatina separación entre “ciencia económica” y deliberación política. Como no podía ser de otro modo, tecnocráticamente, y en medio de las urgencias de la crisis, se impone el arreglo parcial del monetarismo a los planes de estabilización del estructuralismo, desplazándose el foco desde las causas a las soluciones, al enfrentar el descalabro social y económico que aquejaba al país. Con ello, la necesidad de reducir el papel del Estado sobre la economía se impone como proyecto del empresariado y de sus intelectuales no necesariamente por la fortaleza de los argumentos de estos últimos, sino por la de los hechos. Y es que, como lo sugiere el comportamiento del gran empresariado y los economistas

monetaristas, su defensa del papel obstaculizador de la política en la salida a la crisis se sitúa en su acertada percepción común respecto al agotamiento del modelo de desarrollo nacional popular y su incapacidad para mantener el tipo de relaciones sociales sobre el que hasta entonces había descansado. El poder a cambio de la inestabilidad política volvió a relevarse en ocasiones anteriores durante el siglo XX. En ese marco, el mejor aliciente a la posición de la intelectualidad empresarial no es su triunfo en el combate de ideas, sino que el brusco giro que la crisis obliga a dar, imponiendo los tiempos de la política por sobre las soluciones de largo plazo. Por ello, no es un efecto ideológico lo que unifica a las asociaciones empresariales y a los economistas argentinos, sino la presión de una época que agoniza.

Lo mismo ocurre con el argentino promedio: no es que aquel, al terminar la década, esté convencido de que la mejor salida a la crisis sean las medidas de ajuste estructural con que se gira al neoliberalismo (el triunfo electoral que alcanza Menem en 1989 invocando los valores clásicos del peronismo, así lo confirman). Tampoco es cierto que se haya consolidado una base de legitimidad sobre la cual descansó más tarde la necesidad de dicho giro. Más bien, la legitimidad sustantiva que se instala refiere al acuerdo respecto a adoptar medidas distintas a las usadas hasta ese momento, abriéndose un amplio espacio de experimentación para ensayar planes económicos, como quedará refrendado con el controvertido Plan de Convertibilidad a inicios de los años noventa.

Toda esta política, además, fue impulsada por un gobierno peronista como el de Menem, cuyo liderazgo se forja, a nivel nacional, solo a partir del proyecto alternativo que, internamente, impulsa la tendencia renovadora y que tiene como sello inédito la conformación de un espacio político-intelectual que incluso acerca al peronismo a la izquierda socialista. Lo paradójico, sin embargo, es que esa apuesta, habiendo cumplido su objetivo de devolver al poder al peronismo tras la derrota de 1983, solo logra tal cometido renunciando a la renovación de las estructuras del movimiento. Por ello, a la hora del balance, puede decirse que la Renovación sirvió, fundamentalmente, para proyectar nuevos candidatos y, más allá de la astucia política de ellos, para desnudar que tal intento no fue sino consecuencia de la debilidad

estructural que experimentaban las bases sociales del peronismo, así como de la deslegitimación que afectaba a su identidad política. Esta debilidad, en los años siguientes, ciertamente no desapareció, sino que, por el contrario, se proyectó, permitiendo, tras el *shock* inflacionario y la crisis política de fines de los años ochenta, encumbrar a los mismos tecnócratas que habían ayudado a profundizar el deterioro de la estructura productiva y del empleo desde la dictadura, como portadores de una esperanza que muchos argentinos veían renovada al volver al poder el peronismo.

En el caso del socialismo argentino, aunque desde sus intelectuales surgen algunas de las mejores elaboraciones sobre el socialismo antiburocrático y antiautoritario que existen en la región, la separación entre el campo intelectual y el campo político adquiere aquí la forma del ensimismamiento. Uno relacionado con la predominancia excesiva de lo político en su concepción sobre la democracia, que dejó en la opacidad las profundidades que alcanzaba la crisis social y económica que se vivía. De tal suerte, a su endémico problema de anclaje social, el socialismo argentino, en medio de las rupturas ideológicas que mundialmente se producían a fines de los años ochenta, sumó un engeguamiento intelectual forjado, paradójicamente, en la ambición de su propia propuesta democrática, la que, sin embargo, en la medida que quiso, como Alfonsín y el peronismo renovado, negar el pasado y los actores de ese pasado, terminó imponiendo lo deseado a lo observable.

Ahora bien, los años posteriores a la década de 1980, tras concretarse el giro neoliberal, indicarían que, a diferencia de lo ocurrido en otros países de América Latina, en la Argentina van a ser revertidas, a lo menos parcialmente, las tendencias de desestructuración de los grupos sociales desarrollistas (Ruiz 2019) –entre ellos, el sindicalismo peronista y el empresariado industrial y agrario– que el neoliberalismo impulsa. Justamente, en esa capacidad de resistencia de los viejos actores sociales de este país se encuentran las particularidades con que allí se presenta la escisión entre intelectualidad y sociedad a partir de los años ochenta. Y es que ella se genera dentro de tales actores, cuya resistencia al proceso de cambio reactiva también la exclusión histórica de los intelectuales del ámbito de la política. En efecto, como

se ha visto en este trabajo, ello lo expresan tanto la derrota de la Renovación dentro del peronismo como la incapacidad política del socialismo argentino –más ligado al mundo intelectual que partidista– de proyectarse en el escenario de crisis. Por el contrario, la intelectualidad que sí juega un papel relevante es la tecnocracia empresarial, pero en su esfuerzo de administración del cambio radical que se impulsa en los años noventa. Así pues, los intelectuales son desplazados por la persistencia de unos rasgos históricos que solo se actualizan.

BIBLIOGRAFÍA

- Aboy Carlés, G. 2001. *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Rosario: Homo Sapiens.
- Altamirano, C. 2010. Élités culturales en el siglo XX latinoamericano (9-30), en C. Altamirano (comp.), *Historia de los intelectuales en América Latina*. Vol. II. Buenos Aires: Katz Editores.
- Aricó, J. 1980. Ni cinismo, ni utopía. *Controversia* 2(9-10), s/n. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/259048742/Ni-cinismo-ni-utopia> [1 de junio 2020].
- Aricó, J. 1986. Una oportunidad para ponernos al día. *La Ciudad Futura. Revista de Cultura Socialista* (2), s/n. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/260022357/Una-oportunidad-de-ponernos-al-dia> [1 de junio de 2020].
- Aricó, J. 2005. *La cola del diablo. Itinerarios de Gramsci en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Beltrán, G. 2006. Acción empresaria e ideología. La génesis de las reformas estructurales (199-243), en A. Pucciarelli (coord.), *Los años de Alfonsín ¿el poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Bourdieu, P. 1976. *Intelectuales, política y poder*. Buenos Aires: Eudeba.
- Brunner, J. J. 1981. Las imágenes de la sociedad y la mirada sociológica. *Documento de Trabajo N° 121, Programa Flacso-Chile*.
- Brunner, J. J. y Flisfisch, A. 2014. *Los intelectuales y las instituciones de la cultura*. Santiago: Ediciones UDP.
- Camou, A. 1998. Saber técnico y política en los orígenes del menemismo. *Perfiles Latinoamericanos* (12), 87-107.
- Camou, A. 2006. El saber detrás del Trono. Intelectuales-expertos, tanques de pensamiento y políticas económicas en la Argentina democrática (1985-2001) (139-76), en A. Garcé y G. Uña (comps.), *Think tanks y políticas públicas en Latinoamérica: dinámicas globales y realidades regionales*. Buenos Aires: IDRC-CRDI, Konrad Adenauer Stiftung, Prometeo.
- Canelo, P. 2004. La política contra la economía: los elencos militares frente al plan económico de Martínez de Hoz durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1981) (219-312), en A. Pucciarelli, *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

- Cardoso, F. y Faletto, E. 1969. *Dependencia y desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Casullo, N. 2008. *Peronismo. Militancia y crítica (1973-2008)*. Buenos Aires: Colihue.
- Cavallo, D. 2001. *Pasión por crear*. Buenos Aires: Planeta.
- Caviedes, S. 2018. Intelectualidad, política y sociedad: la renuncia a la imaginación política en la transición chilena. *Demarcaciones* (6), s/n.
- Cazares, L., Christen, M., Jaramillo, E., Villaseñor, L. y Zamudio, L. 1999. *Técnicas actuales de investigación documental*. México DF: Editorial Trillas, UNAM.
- Díaz, A. 2018. Discurso de Raúl Ricardo Alfonsín en el predio de Parque Norte de la Capital Federal, el 1º de diciembre de 1985. *Revista Derechos en Acción*, Universidad Nacional de La Plata, 3(9), 543-88.
- Elizalde, J. 2009. La participación política de los intelectuales durante la transición democrática: el Grupo Esmeralda y el presidente Alfonsín. *Temas de Historia Argentina y Americana* (15), 53-87.
- Faletto, E. 1989. La especificidad del Estado en América Latina. *Revista de la Cepal* (38), 161-200.
- Faletto, E. 2016. Necesitamos una nueva ética del comportamiento (521-534), en Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile (ed.), *Faletto latinoamericano. Artículos y ensayos*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Faletto, E. y Kirkwood, J. 2016. Política y comportamientos sociales en América Latina (21-59), en Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile (ed.), *Faletto latinoamericano. Artículos y ensayos*. Santiago: Editorial Universitaria.
- Fiorucci, F. 2011. *Los intelectuales y el peronismo (1945-1955)*. Buenos Aires: Biblos.
- Garategaray, M. 2013. Entre Perón y Alfonsín: Notas sobre la Renovación peronista. *Temas y Debates* (25), 35-57.
- Halperin Donghi, T. 1988. Estilos nacionales de institucionalización de la cultura e impacto de la represión: Argentina y Chile (27-48), en S. Sosnowski (comp.), *Represión y reconstrucción de una cultura: el caso argentino*. Buenos Aires: Eudeba.
- Heredia, M. 2006. La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno de la política económica de Alfonsín (153-98), en A. Pucciarelli (comp.), *Del poder de la democracia a la democracia del poder. Los años de Alfonsín*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Heredia, M. 2012. Los centros privados de expertise en economía: génesis, dinámica y continuidad de un nuevo actor político en la Argentina (297-338), en S. Morresi y G. Vommaro (comps.), *Saber lo que se hace. Expertos y política en la Argentina*. Buenos Aires: UNGS, Prometeo.
- Heredia, M. 2015. *Cuando los economistas alcanzaron el poder*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Montecinos, V. 1997. Los economistas y las élites políticas en América Latina. *Estudios Internacionales* 30(119), 351-75.
- Neiburg, F. 2005. Inflación y crisis nacional. Culturas económicas y espacios públicos en la Argentina y Brasil. *Anuario de Estudios Americanos* 62(1), 113-38.
- Patiño, R. 1997. Intelectuales en transición. Las revistas culturales argentinas (1981-1987). *Cuadernos de Recienvenido* (4), 5-34.

- Pavón, H. 2004. Entrevista a Beatriz Sarlo: “La sociedad está fracturada”. *Revista Ñ de Clarín*, 13 de marzo de 2004.
- Pavón, H. 2012. *Los intelectuales y la política en la Argentina. El combate por las ideas (1983-2012)*. Buenos Aires: Debate.
- Pinto, A. 1976. *Inflación: raíces estructurales*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Plotkin, M. y Neiburg, F. 2005. Élités intelectuales y ciencias sociales en la Argentina de los años 60. El Instituto Torcuato Di Tella y la nueva economía (197-228), en J. Estrada (comp.), *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Ramírez, H. 2007. *Las corporaciones en el poder. Institutos y acción política en Brasil y Argentina*. IPÊS, FIEL y Fundación Mediterránea. Buenos Aires: Lenguaje Claro Editora.
- Rapoport, M. 2010. *Las políticas económicas de la Argentina. Una breve historia*. Buenos Aires: Brooket.
- Romero, J. L. 1975. *Las ideas políticas en Argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Romero, L. A. 2012. *Historia contemporánea de la Argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Ruiz, C. 2019. *La política en el neoliberalismo. Experiencias latinoamericanas*. Santiago: LOM Ediciones.
- Sábato, J. y Schwarzer, J. 1983. Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia. *Ibero-Americana, Nordic Journal of Latin American Studies* 13(2), 11-38.
- Safford, F. 1991. Política, ideología y sociedad (42-104), en L. Bethell (comp.), *Historia de América Latina*. Vol. VI. Barcelona: Crítica.
- Sidicaro, R. 2010. *Los tres peronismos*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Sigal, S. 1991. *Intelectuales y poder en la Argentina. La década del sesenta*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Touraine, A. 1989. *América Latina. Política y sociedad*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Villarreal, R. 1986. *La contrarrevolución monetarista. Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo*. México DF: Fondo de Cultura Económica.
- Vommaro, G. 2006. Cuando el pasado es superado por el presente: las elecciones presidenciales de 1983 y la construcción de un nuevo tiempo político en la Argentina (245-290), en A. Pucciarelli (comp.), *Del poder de la democracia a la democracia del poder. Los años de Alfonsín*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Weffort, F. 1973. Clases populares y desarrollo social, en A. Quijano y F. Weffort (eds.), *Populismo, marginalización y dependencia*. Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana.